



CONSEJERÍA DE FAMILIA,
JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía todas las firmas auténticas y se han ocultado los datos personales protegidos y los códigos que permitirían acceder al original

UNIÓN EUROPEA
Fondo Social Europeo



ORDEN

NÚMERO 67/2024

CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES

Expte.: 109/2024

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN

En uso de las atribuciones que me han sido conferidas por las disposiciones vigentes

La Dirección General de Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad ha propuesto la tramitación del expediente para la adjudicación de un contrato de Servicios denominado **“SERVICIO ESPECIALIZADO DE INTERVENCIÓN CON MENORES DE 14 AÑOS EN CONFLICTO CON LA LEY”**, COFINANCIADO AL 40% POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO PLUS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DEL FSE + 2021-2027 DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

De conformidad con lo establecido en el artículo 119.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, podrán ser objeto de tramitación urgente los expedientes correspondientes a los contratos cuya celebración responda a una necesidad inaplazable o cuya adjudicación sea preciso acelerar por razones de interés público. A tales efectos el expediente deberá contener la declaración de urgencia hecha por el órgano de contratación, debidamente motivada.

Al respecto, se exponen a continuación las razones de interés público que justifican la tramitación del contrato de referencia por el procedimiento de urgencia en base a la obligación legal de incluir a las personas menores de 14 años en conflicto con la ley en un plan de seguimiento que valore su situación socio-familiar diseñado y realizado por los servicios sociales competentes de cada comunidad autónoma, de conformidad con lo establecido en el artículo 17 bis de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Según dispone el artículo 3 de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, cuando el autor de los hechos tipificados como delitos o faltas en el Código Penal o las leyes penales especiales, sea menor de catorce años, no se le exigirá responsabilidad con arreglo a dicha ley orgánica, sino que se le aplicará lo dispuesto en las normas sobre protección de menores previstas en el Código Civil y demás disposiciones vigentes. Para ello se establece que el Ministerio Fiscal deberá remitir a la entidad pública de protección de menores testimonio de los particulares que considere precisos respecto al menor, a fin de valorar su situación, y dicha entidad habrá de promover las medidas de protección adecuadas a las circunstancias de aquél conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero.

Por su parte, la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, introduce en su disposición final octava, apartado seis, un nuevo artículo 17bis en la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, relativo a las personas menores de 14 años en conflicto con la ley, en virtud del cual, las personas a las que se refiere el artículo 3 de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, de responsabilidad penal de los menores serán incluidas en un plan de seguimiento que valore su situación socio-familiar diseñado y realizado por los servicios sociales competentes de cada comunidad autónoma.

Asimismo, la disposición final vigésima segunda de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, establece el plazo de un año, a partir de la entrada en vigor de la misma (25/06/2021), para la adecuación de las normas reguladoras autonómicas a lo previsto en ella.

Consecuentemente, la Ley 4/2023, de 22 de marzo, de derechos, garantías y protección integral de la infancia y la adolescencia de la Comunidad de Madrid, dedica su artículo 126 a los niños menores de 14 años en conflicto con la Ley. La entrada en vigor de esta Ley se produjo el 16 de abril de 2023. La necesidad de implementar estas actuaciones y adecuar el recurso actual a las novedades legislativas referidas lo antes posible, justifica la urgencia de la tramitación.

La intervención con los niños y adolescentes menores de catorce años en conflicto con la ley debe estar orientada a ofrecerles una respuesta protectora, preventiva, educativa y de intervención especializada, preferentemente en su entorno social más próximo, centrada en la eliminación de las causas de la comisión de tales conductas, en la asunción de responsabilidades y en la reparación del daño causado. Además, ofrecer información, orientación, acompañamiento y, en su caso, atención psicológica, tanto a los niños como a sus familias para proporcionar formación específica, ofrecer ayudas, apoyos y programas de acompañamiento, formación y capacitación parental tanto a los padres, como a los tutores o guardadores.

Asimismo, existen razones de interés público que justifican la tramitación del contrato de referencia por el procedimiento de urgencia en base a la necesidad social de atención e intervención con los menores de 14 años en conflicto con la ley, debido al aumento constatado de la comisión de hechos delictivos por parte de estos menores.

La Fiscalía de la Comunidad de Madrid en su memoria 2023 (ejercicio 2022), recoge que en la franja comprendida entre los 14 y los 16 años se registraron 4.616 menores, de los que 1.901 ya contaban con anteriores registros y en lo relativo a los menores inimputables, se registraron 2.259, contando 541 de ellos con anotaciones previas en la sección. En este sentido, se refiere que, si bien la intervención con estos menores en conflicto con la ley es satisfactoria en muchos supuestos, también resulta necesario que aquella sea una intervención integral ya que ello evitaría la necesidad de una actuación desde el ámbito penal o el fracaso de la llevada a efecto.

A la vista de estos datos, es incuestionable plantear la importancia de llevar a cabo una intervención socio-educativa con carácter integral y de manera inmediata, una vez cometido el hecho delictivo, para aumentar la eficacia de dicha intervención y evitar que en el futuro dichas conductas puedan reproducirse y agravarse.

La justificación de dar respuesta a la necesidad de intervención inmediata, se ve respaldada por argumentos tales como que:

1. Las conductas disociales cometidas por los menores de 14 años son de igual gravedad que las cometidas por adolescentes mayores.
2. La intervención protectora de la Administración debe ir más allá de atender e intervenir en situaciones de posible desamparo, ofreciendo una intervención especializada para estas situaciones.
3. La ausencia de respuesta ante una conducta delictiva puede favorecer su reiteración y la posible consolidación de una carrera delictiva en edades superiores.
4. La necesidad de respetar los derechos y atender las necesidades de las personas

perjudicadas por una conducta delictiva.

5. La intervención ante las conductas disociales de menores de 14 años favorece la optimización de recursos económicos y personales.

La existencia de conductas disociales en edades precoces no puede ser minimizada, sino que debe ser tenida en cuenta y valorada de forma especializada a fin de evitar la reiteración de estos comportamientos, siempre sin perder de vista el interés superior del menor como principio rector de la actuación administrativa.

Obviar la existencia de estos sucesos y no reaccionar de manera inmediata, es privar a los que participan de estas situaciones de una atención individualizada de sus necesidades y de aprender, reflexionar y mejorar, contribuyendo de esta manera a prevenir comportamientos disociales que puedan ser objeto de posibles conductas sancionables en el ámbito penal, a partir de los 14 años.

Acompañar a los menores en el proceso de responsabilización de su propia conducta, así como a los padres por la conducta de sus hijos, es una inversión en la formación de los futuros adultos y en su capacidad para hacer frente a sus decisiones y sus acciones.

En conclusión, por los motivos expuestos, en relación con la necesidad de implementar las novedades producidas en la legislación estatal y autonómica y de responder de forma rápida a la creciente necesidad social de atención e intervención con los menores de 14 años en conflicto con la ley, debido al aumento constatado de la comisión de hechos delictivos por parte de estos menores.

DISPONGO

Declarar de urgencia la tramitación del expediente de Servicios denominado **“SERVICIO ESPECIALIZADO DE INTERVENCIÓN CON MENORES DE 14 AÑOS EN CONFLICTO CON LA LEY”**, COFINANCIADO AL 40% POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO PLUS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DEL FSE + 2021-2027 DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

| | |
|-----------------------------------|---|
| En Madrid, a la fecha de la firma | <p>LA CONSEJERA DE FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES (P.D. Orden 3147/2023, de 5 de diciembre, BOCM nº 304, de 22/12/2023) LA DIRECTORA GENERAL DE INFANCIA, FAMILIA Y FOMENTO DE LA NATALIDAD</p> <p>Firmado digitalmente por: SILVIA VALMAÑA OCHAITA - ***6248** Fecha: 2024.01.12 08:36</p> |
|-----------------------------------|---|